CONTENIDO

	Pág N°
PODER EJECUTIVO	
Decretos.....	2
DOCUMENTOS VARIOS.....	8
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	
Resoluciones.....	29
Edictos.....	31
Avisos.....	41
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.....	43
REGLAMENTOS.....	48
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.....	54
RÉGIMEN MUNICIPAL.....	56
AVISOS.....	58
NOTIFICACIONES.....	62
FE DE ERRATAS.....	68

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

N° 38036-MP-MBSF

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Y EL MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 51, 140 incisos 3), 8), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978 y sus reformas, los artículos 1 incisos a), b), e) y f), 12, 15 incisos a), b) y c), 34 incisos a), b), c) y d) y 35 inciso a), b), d), f), l), m) y n) de la Ley N° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, de 25 de octubre de 1999 y sus reformas y los artículos 2 incisos a), b) y c), 10 incisos a) y b), 13 incisos a) y b), 27 incisos a), b), c) y d) y 28 incisos f), g), e i) del Decreto Ejecutivo No. 30438-MP, Reglamento de la Ley N° 7935, de 19 de abril de 2002.

Considerando:

I.—Que el envejecimiento de la población es uno de los temas prioritarios del desarrollo social en el siglo XXI. La disminución de los niveles de mortalidad y el descenso de la fecundidad, han permitido que una porción considerable de la población viva hasta una edad avanzada.

II.—Que en los últimos cuarenta años, Costa Rica ha venido experimentando un proceso de transición demográfica, que ha provocado una modificación profunda en la estructura de edades de la población. Respecto a la población total, las personas adultas mayores representan un 5,3% en el año 2000, aumentando a 6,6% en el año 2010, y se prevé que ese porcentaje casi se duplicará para el año 2025 a un 11,5%.

III.—Que Costa Rica es uno de los países de la región centroamericana que más rápidamente envejecerá, lo que origina cambios y plantea la necesidad de organizar las acciones del Estado frente a las consecuencias sociales, económicas y culturales del envejecimiento poblacional e individual, para orientar y delimitar el accionar nacional en esta materia, tanto a corto como a largo plazo.

IV.—Que el artículo 51 de la Constitución Política establece una protección especial del Estado y una relevante y obligada intervención en materia social a favor de aquellos sectores de la población que, por su condición, así lo requieren, tal es el caso de las personas adultas mayores.

V.—Que la Ley N° 7935, publicada en el Alcance N° 88 a *La Gaceta* N° 221 del 15 de noviembre de 1999 y sus reformas y el Decreto Ejecutivo N° 30438-MP, publicado en *La Gaceta* N° 93 del 16 de mayo de 2002, establecen el marco normativo para garantizar la especial protección y tutela estatal que requieren las personas adultas mayores, reconociendo una serie de derechos y creando una serie de obligaciones a las Instituciones del Estado para su cumplimiento.

VI.—Que las políticas públicas son la expresión de una respuesta a una demanda social identificada y sirven para orientar a los actores sociales involucrados, en la ejecución de planes, programas, proyectos y acciones dirigidos a revertir la problemática social que les da origen por medio de directrices y lineamientos. Por ello, la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, se constituye en el marco político de largo plazo que tiene como objetivo promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas adultas mayores y adoptar medidas específicas que estimulen y orienten un envejecimiento activo en Costa Rica.

VII.—Que de conformidad con el artículo 35 incisos a), b), d), f), l) y m) de la Ley N° 7935 ya citada, corresponde al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), como órgano rector en materia de vejez y envejecimiento, formular las políticas y los planes nacionales en materia de envejecimiento; conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y servicios dirigidos a la población adulta mayor, que sean ejecutados por las instituciones públicas o privadas; fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y servicios relativos a la atención integral de las personas adultas mayores y velar por ellos; conocer las evaluaciones sobre el desarrollo administrativo y técnico de los programas y servicios de atención de la población adulta mayor, ejecutados por las instituciones con los aportes económicos del Estado, y velar porque estos se ejecuten conforme a su destino; velar por el cumplimiento de declaraciones, convenios, leyes, reglamentos y demás disposiciones conexas, referentes a la protección de los derechos de esta población, y ejercer las demás funciones que se consideren convenientes para el desarrollo de las actividades en pro del bienestar, desarrollo y la protección de las personas adultas mayores.

VIII.—Que mediante el oficio MBSF-14-01-2013 de 14 de febrero de 2013, el Ministro de Bienestar Social y Familia, en su función de rector del Sector Bienestar Social y Familia, brinda el aval correspondiente a la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 y autoriza el trámite de publicación respectivo.

IX.—Que el Estado Costarricense debe garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la población adulta mayor, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de esta población, formulando, promulgando y ejecutando políticas públicas integrales, cuyo fin es garantizar la creación de condiciones y oportunidades para que todas las personas adultas mayores que habitan en el territorio nacional, tengan una vida plena y digna acorde con los más altos valores de la tradición nacional del país. **Por tanto,**

Junta Administrativa

Jorge Luis Vargas Espinoza

DIRECTOR GENERAL IMPRENTA NACIONAL
DIRECTOR EJECUTIVO JUNTA ADMINISTRATIVA

Lic. Isaías Castro Vargas

REPRESENTANTE MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

Imprenta Nacional

Costa Rica

Lic. Freddy Montero Mora

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

DECRETAN:

POLÍTICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO
Y VEJEZ 2011-2021

Artículo 1°—Se establece la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, como el marco político de largo plazo que establece el Estado costarricense, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas adultas mayores y adoptar las medidas específicas que estimulen y orienten un envejecimiento activo, que han de ser desarrollados por la institucionalidad pública en el período 2011-2021.

Artículo 2°—Los retos de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, son los siguientes:

- a) Envejecimiento activo y con calidad de vida.
- b) Imagen positiva y revalorizada de las personas adultas mayores, excluyendo mitos y estereotipos.
- c) Seguridad económica en la vejez.
- d) Entornos seguros y amigables para todas las edades.
- e) Relaciones intergeneracionales y de género.
- f) Articulación multidisciplinaria y multisectorial en términos de protección social a las personas adultas mayores.
- g) Cuidado como función social para la atención y asistencia de las personas adultas mayores en situaciones de dependencia.

Para ello, la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 se regirá por los principios de universalidad, equidad, dignidad, solidaridad intergeneracional, participación social y corresponsabilidad social.

Artículo 3°—Todas las dependencias del Sector Público serán responsables por la implementación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, dentro de su ámbito legal respectivo.

Artículo 4°—Para la implementación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, las dependencias del Sector Público podrán hacer los ajustes razonables (modificaciones y adaptaciones necesarias) que se requieran en cada caso particular, para garantizar el ejercicio de los derechos a las personas adultas mayores.

Artículo 5°—La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, se ejecutará mediante la implementación de cinco líneas estratégicas, según los siguientes principios y acciones:

I.—Línea Estratégica de Protección Social, Ingresos y Prevención de la Pobreza: se propone disminuir la pobreza de la población adulta mayor, mejorar el bienestar social e individual, reducir la vulnerabilidad por falta de empleo o de ingresos y generar mayor equidad. Busca identificar estrategias que permitan reducir la pobreza en forma efectiva y duradera. Igualmente, generar estrategias para mantener y mejorar los medios de vida, el acceso al sistema de pensiones no contributivas, a transporte seguro, a condiciones de educación y de vivienda adecuados y entornos saludables y seguros para las personas adultas mayores. Pretende una revisión de los programas de preparación para la jubilación, a fin de proponer modificaciones que garanticen el desarrollo de un plan de vida complementario, el empoderamiento, el auto cuidado y la cultura del ahorro.

Busca crear, fortalecer y consolidar las redes sociales de apoyo, para atender la inequidad e injusticia social. Desarrollar capacidades en las familias que favorezcan la consolidación económica, la solidaridad entre sus miembros y la protección de la persona adulta mayor.

a) Principios orientadores:

1. Las personas adultas mayores deben ser participantes plenas en el proceso de desarrollo económico, social y político del país y tener acceso a los beneficios que se reporten.
2. El envejecimiento de la población crea la necesidad de adoptar las medidas urgentes para garantizar la integración de las personas adultas mayores en nuestra sociedad.
3. Las personas adultas mayores tienen la posibilidad de seguir contribuyendo, por lo que es necesario eliminar todos los factores excluyentes o discriminatorios en contra de esta población.

4. Las políticas públicas deben garantizar la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento económico en especial de las personas adultas mayores.

b) Acciones.

1. Eliminar toda forma de discriminación laboral por edad.
2. Promover la apertura, en igualdad de condiciones, de nuevas fuentes inclusivas de trabajo digno, sostenible y remunerado, en donde se contemplen los derechos de las personas adultas mayores, su independencia, capacidad de decisión y desarrollo personal.
3. Incentivar programas educativos formales, informales y vocacionales, de fácil acceso, colectivos o individuales, para que las personas adultas mayores participen en el proceso de capacitación relacionada con el desarrollo de actividades y oficios productivos generadores de ingresos viables, permanentes y sustentables, con el fin de satisfacer sus necesidades individuales.
4. Gestionar las reformas legales para que incentiven fiscalmente a las y los empleadores de la empresa privada, a fin de garantizar porcentualmente puestos de trabajo para personas adultas mayores.
5. Articular redes sociales efectivas de apoyo y emprendimiento que garanticen la participación de las personas adultas mayores en las relaciones económicas, sociales y políticas y que estén asociadas con su bienestar personal.
6. Ampliar la cobertura de los sistemas de protección social y seguridad social, con el fin de que abarquen a una proporción cada vez mayor de la población que trabaja en el sector formal e informal.
7. Asegurar que todas las personas dispongan de una protección económica y social suficiente en la vejez.
8. Ampliar de manera progresiva y sustentable la cobertura y suficiencia de las pensiones no contributivas, sobre la base de criterios de focalización que aseguren la inclusión de las personas adultas mayores en situación de riesgo social.
9. Vigilar y contemplar que los montos de las jubilaciones se mantengan al nivel del costo de vida digna.
10. Fortalecer los programas de preparación para la jubilación institucional en donde se contemple el retiro escalonado de la jornada laboral, según ocupación u oficio y/o zona geográfica de residencia, dentro del marco de derechos humanos, con el fin de fomentar el desarrollo de un plan de vida complementario para tener calidad de vida digna, el auto cuidado y la cultura del ahorro.
11. Promover programas que garanticen los fondos para la emisión de créditos nacionales e internacionales, con intereses preferenciales para personas adultas mayores, que tengan como meta el desarrollo de proyectos productivos y de micro emprendimientos en las áreas de su competencia.
12. Promover el apoyo financiero y técnico a las organizaciones de personas adultas mayores para favorecer su funcionamiento y autogestión mediante la articulación de acciones interinstitucionales.
13. Fortalecer la infraestructura de atención a las personas adultas mayores en condición de pobreza y riesgo social que contemple las diferentes alternativas de cuidado integral y que tome en cuenta la autodeterminación de las personas adultas mayores.

II.—Línea Estratégica de Abandono, Abuso y Maltrato en Contra de las Personas Adultas Mayores: se persigue un papel proactivo del Estado interesado en que a la población adulta mayor no se le vulneren sus derechos y evitar el abuso y maltrato en su contra; busca la asesoría, la asistencia técnica a nivel territorial e institucional, la capacitación y la educación continua, el desarrollo de capacidades individuales y colectivas para el ejercicio efectivo del derecho de las personas adultas mayores. La asesoría y participación activa de entidades públicas y privadas, y sociedad en general para la planificación y gestión de las políticas públicas en torno al abandono de personas adultas mayores.

a) Principios orientadores.

1. La sociedad debe construir un entorno nacional que rechace el abandono, abuso y el maltrato contra las personas adultas mayores en el hogar o en contextos comunitarios o institucionales.
2. Las comunidades deben trabajar unidas para prevenir los malos tratos contra las personas adultas mayores.
3. El abandono, abuso y el maltrato de las personas adultas mayores debe abordarse interdisciplinaria y multisectorialmente, que contemple mecanismos ágiles de denuncia e intervención judicial.

b) Acciones.

1. Establecer acciones tendientes a que se cumpla a cabalidad con los postulados de protección contenidos en los instrumentos internacionales, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N° 7935 y su Reglamento y demás normativa nacional relacionada con el abandono, abuso y maltrato en contra de las personas adultas mayores.
2. Promover las reformas legales necesarias tendientes a fortalecer los roles de protección integral contra todas las formas y manifestaciones de abandono, abuso y maltrato hacia las personas adultas mayores.
3. Combatir la violencia, el abuso, la negligencia y la explotación de las personas adultas mayores, aplicando efectivamente la normativa que penaliza toda forma de maltrato físico, psicológico, emocional y económico, entre otros.
4. Articular acciones interinstitucionales a favor de las personas adultas mayores en riesgo social y sometidas al abandono, abuso y maltrato en todas sus manifestaciones.
5. Erradicar el maltrato institucional, estableciendo las sanciones correspondientes ante un eventual incumplimiento o abuso de parte de las y los funcionarios institucionales.
6. Establecer protocolos de intervención para la prevención y la detección precoz de conductas de abandono, abuso y maltrato, a partir de la definición de los perfiles de riesgo.
7. Informar a las personas adultas mayores respecto a la protección y apoyo jurídico, social y económico en caso de abandono, abuso y maltrato.
8. Desarrollar planes de estudio inclusivos y orientados en el marco de una cultura de igualdad y sin discriminación, con enfoque de derechos para prevenir la violencia intrafamiliar y social en contra de las personas adultas mayores.
9. Gestionar el desarrollo de campañas masivas con enfoque intergeneracional, con el fin de crear hábitos y valores que contribuyan a la prevención de la erradicación del abandono, abuso y maltrato hacia las personas adultas mayores.
10. Garantizar que la publicidad no incluya imágenes discriminatorias de las personas adultas mayores y el envejecimiento.
11. Motivar a las y los profesionales de la salud, de los servicios sociales y al público en general a que informen sobre los casos en que se sospeche la existencia de abandono, abuso y maltrato a personas adultas mayores.
12. Promover investigaciones y sistematizar estudios que visualicen la problemática del abandono, abuso y maltrato hacia las personas adultas mayores.

III.—Línea Estratégica de Participación Social e Integración Intergeneracional: se pretende fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas adultas mayores y vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los primeros ante el Estado.

a) Principios orientadores.

1. La participación en actividades sociales, económicas, culturales, deportivas, recreativas y de voluntariado contribuyen a aumentar y mantener el bienestar personal de las personas adultas mayores.
2. Los grupos y las organizaciones de personas adultas mayores constituyen un medio importante para facilitar la participación, mediante la realización de actividades de promoción y el fomento de la interacción entre las generaciones.
3. La participación es un Derecho Universal.

b) Acciones.

1. Garantizar que las personas adultas mayores puedan organizarse según sus propios criterios y planes.
2. Promover la organización de comités o grupos formales e informales para la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, recreativas y de uso del tiempo libre en cada comunidad, gestionando el amparo directo de los Gobiernos Locales.
3. Articular con las instituciones públicas y privadas acciones concretas en la promoción y realización de programas educativos, culturales, deportivos, recreativos y de uso del tiempo libre, con enfoque intergeneracional, que contemplen la participación de las personas adultas mayores, así como de la comunidad y la familia.
4. Promover el acceso a la capacitación de las personas adultas mayores con el fin de fortalecer procesos organizativos que incidan en la creación y seguimiento de las políticas públicas.
5. Fortalecer el Foro Consultivo de las Personas Adultas Mayores, con el fin de que se constituya en actores activos brindando aportes en la elaboración, formulación y aplicación de las políticas públicas que las afectan.
6. Crear una plataforma que promueva la representación de las personas adultas mayores en los ámbitos de toma de decisiones.
7. Fomentar la participación de las personas jubiladas y pensionadas, con el fin de aprovechar su experiencia laboral y profesional para ser transmitida a grupos generacionales más jóvenes.
8. Promover una alternativa de respeto y consideración hacia las Personas Adultas Mayores, con el fin de eliminar los mitos y estereotipos relacionados con la vejez.
9. Promover la creación o utilización de la infraestructura existente para la participación de las personas adultas mayores en diferentes actividades recreativas, culturales, deportivas, entre otras.
10. Incorporar en los planes y programas de estudio de todos los niveles, los contenidos del proceso de envejecimiento.
11. Promover investigaciones relacionadas con la participación social e integración intergeneracional, ocupación del tiempo libre, entre otros.
12. Apoyar la elaboración de estudios en donde se cuantifique el aporte de las personas adultas mayores a sus familias, comunidades y sociedad en general.
13. Sensibilizar a la población costarricense sobre el Derecho de las personas adultas mayores a participar y mantenerse activos.

IV.—Línea Estratégica de Consolidación de Derechos: se pretende divulgar y desarrollar instrumentos y procesos de información, de educación y comunicación a la población, para el ejercicio de los derechos humanos, busca promover la corresponsabilidad de las personas adultas mayores, la familia y la comunidad, con metodologías participativas y busca promover, movilizar y gestionar el compromiso de todos los sectores y actores para garantizar la realización plena de los derechos de la población.

a) Principio orientador.

El Estado debe garantizar a las personas adulta mayor el ejercicio pleno de sus derechos y la obtención de sus beneficios.

b) Acciones.

1. Garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos.
2. Establecer mecanismos de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y las organizaciones de personas adultas mayores, con el fin de velar por el cumplimiento de los derechos de esta población.
3. Promover programas de capacitación constante que preparen a la población para la apertura de espacios de análisis y discusión, consensuada en la construcción de una nueva identidad política para la persona adulta mayor, desde la perspectiva de los Derechos Humanos y superando los esquemas del asistencialismo y que incluyan a las personas adultas mayores.
4. Crear y habilitar espacios públicos amigables y seguros, que garanticen la eliminación de barreras arquitectónicas para la accesibilidad de las personas adultas mayores.
5. Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas con el fin de desarrollar programas integrales de capacitación y de formación dirigido a los prestadores de servicio.
6. Estimular la participación de las personas adultas mayores en los programas de educación y de capacitación en materia de derechos y mecanismos de exigibilidad.
7. Facilitar el acceso de las personas adultas mayores a aprender y usar las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
8. Impulsar el desarrollo de programas intensivos de vivienda digna y accesible para personas adultas mayores.
9. Fortalecer iniciativas que permitan a las personas adultos mayores acceder a financiamiento para adquirir una vivienda, o adaptar la propia a sus nuevas necesidades de habitabilidad y seguridad.
10. Desarrollar acciones que promuevan un cambio cultural en la sociedad, orientado al respeto, solidaridad y acompañamiento de las personas adultas mayores.

V.—**Línea Estratégica de Salud Integral:** se garantiza el acceso universal de la población adulta mayor al Sistema de Seguridad Social en Salud y el acceso a la prestación integral de los servicios de salud; a diseñar, e implementar un modelo de atención basado en Atención Primaria en Salud, al desarrollo de instrumentos, guías, normas técnicas para la intervención de las enfermedades más prevalentes en la persona adulta mayor. Persigue la corresponsabilidad del Estado y la sociedad para lograr un entorno favorable para toda la población y la promoción de la salud en general.

Busca fomentar estilos de vida saludables y lograr cambios en los hábitos de las personas para garantizar calidad de vida a través de todas las etapas del ciclo de vida.

a) Principios orientadores.

1. El Estado tiene la corresponsabilidad de crear un entorno favorable a la salud y al bienestar durante toda la vida con especial atención en la vejez.
2. Las personas adultas mayores deben tener acceso a la atención integral y a los servicios de salud, mediante programas de promoción, prevención, atención, curación y rehabilitación que fomenten estilos de vida saludable y su auto cuidado.
3. La formación y capacitación del personal de salud en todos los niveles debe ser una prioridad que permita atender las necesidades especiales de las personas adultas mayores.

b) Acciones.

1. Garantizar la atención preferencial a las personas adultas mayores en todos los servicios de salud.
2. Incentivar programas de promoción, prevención, atención, curación y rehabilitación de la salud en las personas adultas mayores en condiciones de igualdad, sin discriminación alguna y con la calidad y calidez requeridas.
3. Garantizar que la estancia y atención de las personas adultas mayores en los centros de salud, se realice con respeto a su dignidad.
4. Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la salud para las personas adultas mayores, especialmente para las que se encuentran en fase terminal y asegurar un trato digno, igual, equitativo y respetuoso.
5. Promover la inclusión y participación de los diferentes sectores de la sociedad, en campañas asertivas y proactivas, para lograr una atención respetuosa, tolerante, solidaria y digna, con calidad y calidez, a favor de las personas adultas mayores que hagan uso de los servicios de salud.
6. Definir protocolos en donde se definan los lineamientos y parámetros básicos para una atención integral a las personas adultas mayores.
7. Establecer normas relativas al derecho de la prestación de servicios, la provisión de medicamentos básicos, apoyos técnicos y servicios integrales de rehabilitación, especialmente adaptados para mejorar la autonomía de las personas adultas mayores con discapacidad.
8. Promover iniciativas de tipo educativo-formativo en las áreas de bioética, biomédica y de investigación sobre el proceso de envejecimiento y vejez y las nuevas formas de abordaje desde la integralidad, con enfoque de derechos.
9. Incluir como parte de la formación académica, desde los primeros niveles, la promoción de la salud y los estilos de vida saludable como medida para tener un envejecimiento y una vejez satisfactoria.
10. Procurar que la normativa relacionada con los centros que prestan servicios a las personas adultas mayores, sea acorde con una atención de calidad y calidez para esta población.
11. Garantizar la calidad de los servicios prestados a las personas adultas mayores por parte de las organizaciones privadas que atienden esta población en la modalidad de Hogar, Albergue y Centro Diurno, o cualquier otra.
12. Fomentar la creación de alternativas comunitarias a los cuidados de largo plazo para las personas adultas mayores.
13. Fomentar la creación de redes de apoyo a las y los cuidadores (as) familiares, para viabilizar la permanencia de la persona adulta mayor en el hogar y a la vez, prevenir el agotamiento físico y mental del cuidador(a).

Artículo 6°—Corresponde al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en su condición de Órgano Rector en materia de envejecimiento y vejez en Costa Rica, coordinar la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, lo que incluye el seguimiento y monitoreo de los avances en el cumplimiento de sus objetivos y lineamientos; así como la elaboración de un Plan de Acción para su implementación, y la coordinación con las instituciones responsables de su aplicación.

Artículo 7°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil trece.

LAURA CHICHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.—El Ministro de Bienestar Social y Familia, Fernando Marín Rojas.—1 vez.—O. C. N° 36-2014.—Solicitud N° 64109.—C-296080.—(D38036-IN2014009940).